

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR: San Salvador,
a las quince horas con treinta y ocho minutos del día tres de junio de dos mil diecinueve.

El día 12/05/2017 se recibió escrito presentado por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, mediante el cual interpuso denuncia en contra de ., S.A. de C.V., S.A. de C.V., y S.A. de C.V., por supuestos incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor (en adelante LPC).

I. En este estado del procedimiento este Tribunal debe hacer las siguientes consideraciones:

De acuerdo a la estructura que el legislador ha diseñado para el procedimiento sancionatorio en la LPC, existen básicamente tres etapas: inicio, apertura a prueba y resolución final. Para el examen liminar, el artículo 144 de la LPC establece un plazo de cinco días, dentro de los cuales este Tribunal debe resolver sobre el inicio del procedimiento. Por otra parte, una vez concluidas las actuaciones dentro del mismo, este Tribunal debe dictar resolución en el plazo máximo de diez días, conforme lo estipula el artículo 147 de la citada normativa.

Lo anterior, obedece a que la determinación de plazos en la ley son concreciones de los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, en tanto posibilita un pronto diligenciamiento del procedimiento y permite al administrado poder proyectar su conducta futura de acuerdo a pautas generales de previsibilidad.

La doctrina es unánime en sostener que no existe violación de derechos ni garantías fundamentales cuando el incumplimiento de los plazos legales se encuentra debidamente justificado en aspectos como la complejidad fáctica y jurídica del caso y cualquier otra causa que habilite al ente administrativo sobrepasar los plazos determinados en la ley, siempre y cuando el retraso y exceso estén dentro de los parámetros de la razonabilidad.

Asimismo, la doctrina reconoce que la acumulación de procesos en los Tribunales imposibilita que se le exija al Juez cumpla con el procedimiento exacto del plazo, pues el exceso en la carga del trabajo excede del alcance de su diligencia.

Desde esa perspectiva, resulta admisible que la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos sobrepasen los plazos legales, siempre y cuando el retraso se encuentre suficientemente justificado en situaciones que pudieran explicar la demora o paralización de la actuación de la administración, sin que ello implique por sí vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Es conveniente aclarar que el período transcurrido después del plazo legal en el presente procedimiento sancionatorio no ha sido arbitrario, sino que se debe a causas justificadas como el



volumen de trabajo y nuevas competencias atribuidas a este Tribunal contenidas en leyes especiales, lo cual implica instruirse y conocer los casos sometidos a conocimiento del mismo.

Ahora bien, la Ley de Procedimientos Administrativos, que entró en vigencia el día 14/02/2019 – LPA, de aplicación supletoria en el presente procedimiento- establece que la prescripción como figura extintiva de la infracción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción.

Asimismo, el artículo 149 inciso 2º de la mencionada normativa establece los parámetros a tomar en cuenta para el cómputo de los plazos de prescripción acotándose que: *“Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del presunto responsable, del procedimiento administrativo.”*

A su vez, el artículo 148 de la LPA, dispone que *“los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones serán los que determinen las normas que las establezcan”*.

Ahora bien, la Jurisprudencia ha sostenido que *“para la Administración Pública existe la obligación de examinar si, en el caso concreto sobre el cual ha de ejercer la potestad administrativa sancionadora, han operado o no los presupuestos de la prescripción. Ello es así dado que, por seguridad jurídica, no puede existir una persecución administrativa sancionadora permanente en el tiempo, es decir, el administrado no puede ser sometido indefinidamente a la posibilidad del inicio de un procedimiento sancionador por una misma causa”* (Resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ref. 142-2009 de 27-VI-2016).

En la misma resolución continua la Sala acotando que *“la prescripción se instituye como un límite al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, de forma que transcurrido el plazo previsto en la ley, no se puede llevar adelante la persecución pública derivada de la sospecha de que se ha cometido un hecho punible concreto”*.

El plazo de prescripción para sancionar los ilícitos administrativos en materia de consumo se rige por el artículo 107 de la LPC (vigente al momento de los hechos) el cual dispone: *“Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente ley, prescribirán en un plazo de dos años contados desde que se haya incurrido en la supuesta infracción”*.

En ese sentido, al realizar el cómputo de la prescripción en base a los parámetros brindados por la LPA, tenemos que según denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, los supuestos ilícitos administrativos ocurrieron el día 18/10/2016. Resulta evidente que a esta fecha, ha transcurrido un tiempo mayor al estipulado en el artículo 107 de la LPC sin que esta autoridad se haya pronunciado sobre el inicio del procedimiento administrativo con conocimiento del presunto responsable.

Es así que este Tribunal respetuoso del Estado de Derecho y de los principios aplicables en materia sancionadora se ve imposibilitado de conocer de la presente denuncia, puesto que por

el transcurso del tiempo la infracción ha prescrito. En consecuencia deberá ordenarse el archivo de las actuaciones.

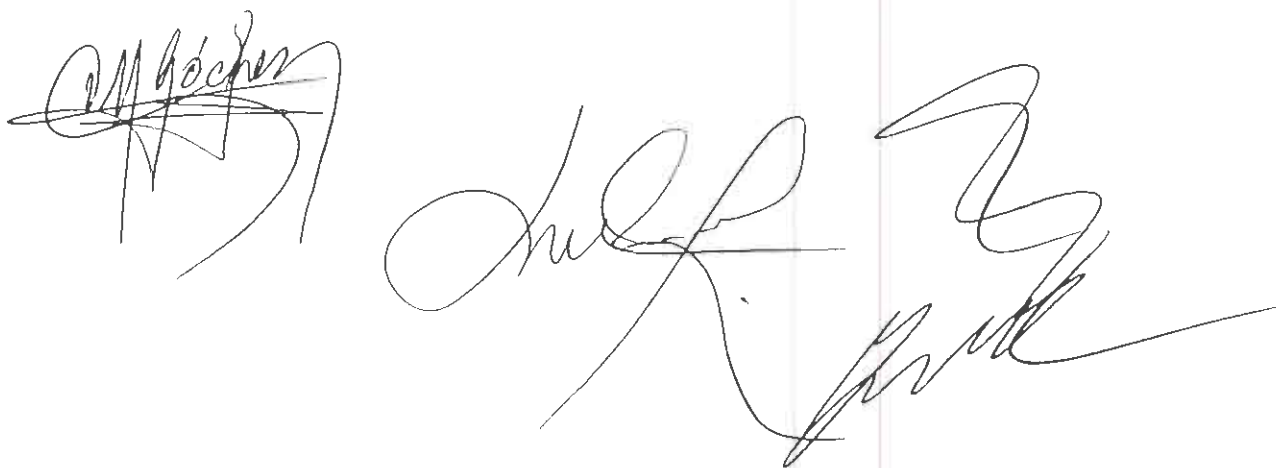
II. En virtud de lo anterior y en base a los artículos 107 de la LPC, 132, 148 y 149 inciso 2º de la LPA, se **RESUELVE**:

a) Declarar extinguida la responsabilidad de las proveedoras , S.A. de C.V., S.A. de C.V., y S.A. de C.V., por la prescripción de la posible infracción atribuida.

b) *Archívese* el presente expediente una vez quede firme la presente resolución.

c) Se hace del conocimiento de las partes interesadas que esta resolución admite el recurso de reconsideración, el cual puede ser interpuesto ante este Tribunal en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su notificación en la siguiente dirección: 7ª Calle Poniente y Pasaje "D" #5143 Colonia Escalón, San Salvador.

d) *Notifíquese*.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.



MB

